

Cuestionario “Independencia de los Magistrados y Abogados”

Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial

El Poder Judicial de Costa Rica, se encuentra integrado por distintas instancias judiciales agrupadas en tres ámbitos: jurisdiccional, auxiliar de justicia y ámbito administrativo.

El ámbito jurisdiccional comprende a toda la judicatura en sus distintos niveles y a los 22 magistrados y magistradas. Por otro lado, en el ámbito auxiliar de justicia se incluye al Ministerio Público, Defensa Pública y Organismo de investigación Judicial, así como a la Escuela Judicial. En lo relativo al ámbito administrativo, este contempla todas las instancias a nivel administrativo que coadyuvan para el correcto funcionamiento de todo el Poder Judicial a nivel nacional.

En el presente cuestionario “Independencia de Magistrados y Abogados”, la institución reporta una serie de normativa referentes a las restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación, el derecho de reunión pacífica y los derechos políticos de los jueces (zas), fiscales (as) y toda persona funcionaria judicial.

La Institución, por su función específica de administración de justicia, requiere conformarse por personas servidoras judiciales íntegras y eficientes, ya que se denota que afrontan una serie de amenazas a su independencia judicial y probidad, las cuales, aun cuando no se llegaren a concretar, pueden perjudicar la imagen y la confianza de la población en el Poder Judicial.

A continuación, se establecen los distintos insumos brindados por las instancias judiciales a la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI), instancia encargada de recopilar la información suministrada en relación a la temática de la consulta, tales como: Dirección Jurídica, Ministerio Público, Secretaría General de la Corte, Magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez coordinador de la Comisión de Ética y Valores, Secretaría Técnica de ética y Valores, con la finalidad de dar respuesta a la solicitud planteada por el Relator Especial sobre Independencia de Magistrados y Abogados.

**MANDATO DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS MAGISTRADOS Y ABOGADOS**

**CUESTIONARIO.**

**1) Sírvase proporcionar información detallada sobre las disposiciones constitucionales, legislativas y reglamentarias sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación, el derecho de reunión pacífica y los derechos políticos de los jueces y fiscales.**

En la primera columna se detalla una lista de derechos y libertades tales como: derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación, el derecho de reunión pacífica y los derechos políticos de los jueces y fiscales, en la segunda columna se detallan disposiciones constitucionales referentes a cada uno de esos derechos y libertades, y en la tercera columna se detalla disposiciones legislativas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Derechos y libertades de los jueces y fiscales** | **Disposiciones** | | |
| **Constitucionales**  **Independencia Judicial**  **Artículo 9º**-El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. (…)  **Libertad de Cátedra**  **Artículo 87**.- La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria.  **Artículo 154**.- El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución y a la ley, y las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos. | **Legislativas**  **Estatuto de Servicio Judicial** Artículo 44.- Los servidores judiciales gozarán del derecho de estabilidad, cuando ingresen debidamente al servicio judicial y cuando no se trate de funcionarios de período fijo; y sólo podrán ser removidos por reducción forzosa de servicios o cuando haya mérito para ordenar su traslado o permuta a otro puesto de la misma o inferior clase, o de su separación para el mejor servicio público, o cuando incurran en causal de despido, de acuerdo con el presente Estatuto, sus reglamentos, la Ley.  **Artículo 68.-** La Carrera Judicial ofrecerá los siguientes derechos e incentivos: a) Estabilidad en el puesto, sin perjuicio de lo que establezca la ley en cuanto a régimen disciplinario y de conveniencia del servicio público) Ascenso a puestos de superior jerarquía, en su caso, de acuerdo con el resultado de los respectivos concursos. c) Traslado a otros puestos de la misma categoría o inferior, a solicitud del funcionario interesado, si así lo acordare la Corte Suprema de Justicia o el Consejo Superior del Poder Judicial, en su caso. ch) Capacitación periódica, de acuerdo con las posibilidades y los programas de la Escuela Judicial o con otras instituciones de educación, nacionales o extranjeras, si así se estimare de interés para el Poder Judicial, por decisión de los órganos administrativos competentes. La escuela Judicial deberá colaborar con la carrera judicial en la medida de sus posibilidades, dictando cursos que tiendan a facilitar el ingreso a la carrera, el ascenso dentro de ella y a la especialización en diversas ramas del Derecho y en las distintas actividades judiciales.  **Ley Orgánica del Ministerio Público: Artículo 3 Independencia funcional.** El Ministerio Público tendrá completa independencia funcional en el ejercicio de sus facultades y atribuciones legales y reglamentarias y, en consecuencia, no podrá ser impelido ni coartado por ninguna otra autoridad, con excepción de los Tribunales de Justicia en el ámbito de su competencia.  **Artículo 45**. Normas aplicables. Los funcionarios y empleados del Ministerio Público gozarán del derecho de estabilidad y solo podrán ser removidos conforme se establece en el Estatuto de Servicio Judicial, con la intervención del Fiscal General, que se acuerda en la presente Ley.  **Código Procesal Penal Artículo 5.-** Independencia Los jueces sólo están sometidos a la Constitución, el Derecho internacional y Comunitario vigentes en Costa Rica y a la ley. En su función de juzgar, los jueces son independientes de todos los miembros de los poderes del Estado. Por ningún motivo, los otros órganos del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de las causas, ni la reapertura de las terminadas por decisión firme; tampoco podrán interferir en el desarrollo del procedimiento. Deberán cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por los jueces, conforme a lo resuelto. En caso de interferencia en el ejercicio de su función, el juez deberá informar a la Corte Suprema de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia. Cuando la interferencia provenga del pleno de la Corte, el informe deberá ser conocido por la Asamblea Legislativa. | **Reglamentarias** |
| libertad de expresión | Artículo 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.  Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.  No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas.  Artículo 29.- Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca. | **Ley Orgánica del Poder Judicial**  “ARTICULO 9.- Se prohíbe a todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial: […] 4.- Dirigir felicitaciones o censura por actos públicos, a funcionarios y corporaciones oficiales.Se exceptúan los asuntos en que intervengan, en defensa de intereses legítimos y derechos subjetivos y en los casos en que la ley lo permita. 5.- Cualquier participación en procesos políticos electorales, salvo la emisión de su voto en elecciones generales.  6.- Tomar parte activa en reuniones, manifestaciones y otros actos de carácter político electoralo partidista, aunque sean permitidos a los demás ciudadanos. […] Los servidores que incurran en los hechos señalados en este artículo serán corregidos disciplinariamente, según la gravedad de la acción, con una de las sanciones establecidas en el artículo 195 de la presente Ley”. |  |
| libertad de asociación | Artículo 25.- Los habitantes de la República, tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna.  Artículo 60.- Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales.  Queda prohibido a los extranjeros ejercer dirección o autoridad en los sindicatos. |  |  |
| derecho de reunión pacífica | Artículo 26.- Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para negocios privados, o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta pública de los funcionarios.  Reuniones en recintos privados no necesitan autorización previa. Las que se celebren en sitios públicos serán reglamentadas por la ley. |  |  |
| derechos políticos | Artículo 93.- El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil. |  |  |

Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en su artículo 13 “Libertad de pensamiento y de expresión”, remiten a la ley para regular los límites de las libertades de expresión, de asociación, de reunión y los diferentes derechos políticos de todas las personas, entre ellas, las funcionarias judiciales.

Las regulaciones existentes, se establecen en cuerpos legislativos orgánicos, que, por regular la función judicial, expresan normas que por excepción restringen el ejercicio de algunas libertades fundamentales, en resguardo de los intereses propios de la función pública de carácter jurisdiccional o como auxiliar de aquella.

La Ley Orgánica del Poder Judicial (N°7728) contiene una serie de limitaciones a los servidores judiciales: El artículo 195 de este cuerpo normativa establece como sanciones la advertencia, la amonestación escrita, la suspensión y la revocatoria del nombramiento.

**¿Estas disposiciones cubren expresamente el ejercicio de estos derechos en línea, por ejemplo, a través de tecnologías digitales como Internet y redes sociales?**

La normativa antes expuesta no cubre de forma expresa la proclamación de estos derechos en línea, pero el fondo, aplica para todo ciudadano con las restricciones que las diferentes leyes y reglamentos les confieren a los (as) jueces (zas) y fiscales (as) respecto a su investidura.

Sin embargo, en relación con las restricciones al ejercicio de los denominados derechos “en línea”, existen dos circulares del Consejo Superior del Poder Judicial que regulan de manera expresa el ejercicio de estas libertades por medios digitales:

1. Circular N° 185-2014 instaura el “Manual de etiqueta para el uso del correo electrónico (netiqueta)[[1]](#footnote-1)”, efectúa recomendaciones básicas sobre interacción humana, contenido de mensaje, cuidado en la escritura, respuesta a mensajes, mensajes de dudosa procedencia, para asegurar el adecuado uso del correo electrónico”.
2. Circular N° 206-2015 “Recomendación del Consejo de Notables sobre el uso de Redes Sociales”[[2]](#footnote-2), refiere al uso que deben hacer las personas servidoras judiciales de las redes sociales, de forma que no afecten la imagen institucional y no se ponga en entredicho la transparencia, objetividad e imparcialidad de administrar justicia. Realiza recomendaciones para orientar la utilización de las “redes sociales” en el marco de la vida privada de la persona servidora judicial. Una de ellas se relaciona directamente con los derechos políticos y la libertad de expresión: *“(…) iv. Evitar crear o participar en perfiles, grupos o páginas de sitios que se utilicen para el intercambio de opiniones sobre beligerancia política o partidaria*”.

**2) Sírvase proporcionar información sobre los casos en que los jueces y fiscales de su país fueron objeto de procedimientos legales o disciplinarios por un presunto incumplimiento de sus obligaciones y deberes, al momento de ejercer dichas libertades fundamentales, a la expresión en línea [online] que a su equivalente fuera de línea (offline). También proporcione información sobre los casos en que los jueces o fiscales hayan estado sujetos a amenazas, presiones, interferencias o represalias en relación con, o como resultado del, ejercicio de sus libertades fundamentales.**

Se cuenta con la apertura de causas disciplinarias ante el Tribunal de la Inspección Judicial, contra un juez (causa 18-000684-0031-IJ) y contra una fiscala (causa 18-000688-0031-IJ).

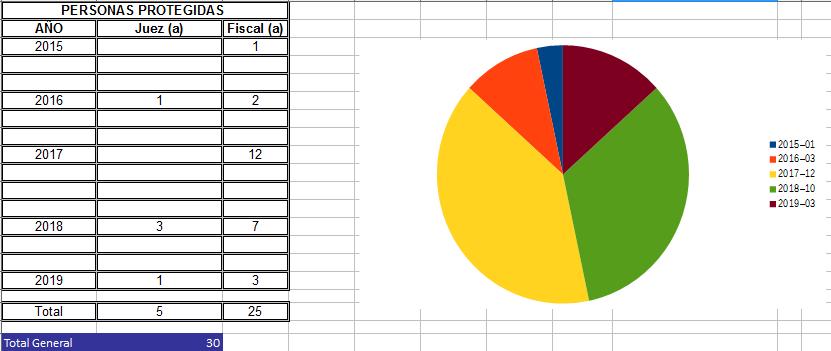
Las causas fueron abiertas por “supuestas manifestaciones de índole político”, tras llevar a cabo valoraciones despectivas sobre militantes de uno de los partidos políticos en contienda, durante las pasadas elecciones nacionales para el cargo de presidente del Poder Ejecutivo y gabinete de gobierno.

Igualmente, se hace referencia a un tercer caso en el cual, la exdirectora de la Defensa Pública costarricense, fue sometida a un proceso disciplinario por haber tomado parte en las manifestaciones convocadas por un sector del Poder Judicial promovente de la huelga decretada como medida de presión contra las reformas al régimen de pensiones del Poder Judicial, que se efectuó entre el 19 y el 31 de julio.

La Sala Constitucional mediante resolución 2017-17765, acogió el recurso de amparo promovido por la funcionaria y ordenó dejar sin efecto el traslado de cargos dispuesto en expediente 17-001187-031-IJ por el Tribunal de la Inspección Judicial, disponiéndose el archivo de la causa.

En su oportunidad, la ex jefa de la Defensa Pública manifestó que la apertura de la causa disciplinaria sentaba un precedente nefasto por coartar la libertar de expresión, la libertad sindical, afirmación que encontró amparo en la decisión del tribunal constitucional.

En relación a los casos en los cuales jueces (zas) y fiscales (as), hayan estado sujetos a amenazas, presiones, interferencias o represarías, como resultado del ejercicio de sus libertades fundamentales, y de acuerdo a los datos suministrados por la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Organismo de Investigación Judicial, se adjunta gráfico sobre la cantidad de personas funcionarias judiciales con rango de Juez (a) o Fiscal (la), que por asuntos de amenaza ha ingresado al programa de atención y protección, de conformidad a lo que establece la Ley 8720 “ Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal”.  Dicha población ha recibido en algún momento amenazas o información respecto a la posibilidad que se pueda suscitar un acto de violencia en su contra y en caso excepcional contra sus familiares, como consecuencia de su investidura. En virtud de lo anterior se han aplicado acciones operativas de Protección para salvaguardar la vida e integridad de las personas referidas, previniendo de esta forma la aparente comisión del hecho.



**3) Sírvase proporcionar información sobre si, y en qué medida, el ejercicio de las libertades fundamentales antes mencionadas se ha regulado en códigos de ética judicial o conducta profesional desarrollados por asociaciones profesionales de jueces y fiscales en su país. ¿Incluyen estos códigos expresamente disposiciones relativas al ejercicio de estos derechos mediante el uso de tecnologías digitales?**

Respecto al actuar de los (as) jueces (zas) y fiscales (as) en nuestro país, se encuentra regulado en nuestra Constitución Política, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Ministerio Público, el Estatuto de Servicio Judicial y Código de Ética Judicial. Por la época de adopción de las indicadas leyes, no se encuentra previstas normas concretas referentes al uso de tecnologías digitales.

Por su parte, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica es el ente público corporativo encargado de asegurar “[…] *la calidad deontológica, ética y moral*”[[3]](#footnote-3) de todos (as) los (as) profesionales en derecho del país incluyendo a los (as) jueces (zas) y fiscales (as). En la sesión N° 50-2004, este colegio profesional emitió el “Código de deberes jurídicos, morales y éticos del profesional en derecho[[4]](#footnote-4)”.

Esta reglamentación establece una serie de limitaciones a la libertad de expresión en sus artículos 15 *“El abogado y la abogada deberán ser respetuosos en todas sus actuaciones, absteniéndose de utilizar términos despectivos, irrespetuosos o peyorativos, ya sea en forma escrita o verbal. Si la conducta se diera con ocasión del trámite jurisdiccional de un caso, deberá estarse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial”.*

Artículo 17 “*El abogado y la abogada deberán actuar con corrección en el ejercicio profesional. Su conducta se ajustará al ordenamiento jurídico vigente en la sociedad costarricense, debiendo abstenerse de toda actuación impropia que pueda desacreditar la profesión. Su ejercicio profesional deberá ser siempre probo, leal, veraz y de buena fe*”.

Artículo 53 *“El abogado y la abogada deberán conducirse de forma correcta, respetuosa y cortés, en el trato con funcionarios judiciales y personas que laboren en el Poder Judicial. Igual obligación tienen el abogado y la abogada en todos los asuntos en que intervengan como tales en sede administrativa y en empresas privadas”.*

Existe sanciones disciplinarias para el caso de que los agremiados incumplan estas disposiciones por lo que no se trata propiamente de un “código de ética”. No existe regulación expresa -por lo menos en esta normativa- relativa al uso de tecnologías digitales.

Asimismo, el Poder Judicial cuenta con el código de ética[[5]](#footnote-5), donde se establecen los valores y las conductas derivadas, busca rescatar la autenticidad de la reflexión ética que nos humaniza, por tanto, no es un instrumento represivo, sino una guía para promover las mejores prácticas, adicionalmente, el consejo de notables ha establecido recomendaciones sobre el uso de redes sociales[[6]](#footnote-6) , las mismas han sido replicadas y consideradas a nivel latinoamericano por la Cumbre Judicial y la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.

Sobre la consulta respecto a la existencia de disposiciones expresamente relacionadas con el ejercicio de estos derechos mediante el uso de tecnologías digitales, debe indicarse que no existe normativa como tal, lo que sí se puede mencionar es la existencia en el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial, permite el acceso a la intranet judicial a las organizaciones gremiales, de tal manera que se garantiza la comunicación electrónica de los diferentes gremios a la población.

**4)** **¿Qué clase de restricciones (constitucionales, legales o reglamentarias) existen en el sistema legal de su país en relación con el ejercicio de estas libertades? ¿Cuál es la razón de estas restricciones? ¿Se aplican estas restricciones fuera de línea y en línea? Y si no, ¿existen restricciones particulares al ejercicio de estos derechos mediante el uso de tecnologías digitales.**

La Ley Orgánica del Poder Judicial[[7]](#footnote-7), es aplicable a todas las personas judiciales, en lo que interesa, se transcribe:

“*Artículo 8.- Los funcionarios que administran justicia no podrán:*

*…*

*3.- Expresar y aun insinuar privadamente su opinión respecto de los asuntos que están llamados a fallar o conocer.*

*Aparte de la sanción disciplinaria que se impondrá al funcionario, el hecho deberá ser puesto en conocimiento del Ministerio Público.*

*4.- Comprometer u ofrecer su voto, o insinuar que acogerán esta o aquella otra designación al realizar nombramientos administrativos o judiciales. Se sancionará con suspensión a quien se compruebe ha violado esta prohibición.*

*Las prohibiciones establecidas en los incisos 3) y 4) son aplicables a todos los servidores judiciales, en el ejercicio de sus funciones.*

*Ley Orgánica del Poder Judicial Ley N° 7333 de 5 de mayo de 1993”.*

El artículo 9 es muy claro, y reúne de manera general los lineamientos a seguir por parte de los (as) servidores (as) judiciales, punto de contacto entre la libertad de expresión, derecho de reunión pacífica y derechos políticos de las personas juzgadoras y fiscales del Ministerio Público, el cual cita:

*“Artículo 9.- Se prohíbe a todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial:*

*“(…)*

*4.- Dirigir felicitaciones o censura por actos públicos, a funcionarios y corporaciones oficiales. Se exceptúan los asuntos en que intervengan, en defensa de intereses legítimos y derechos subjetivos y en los casos en que la ley lo permita.*

*5.- Cualquier participación en procesos políticos electorales, salvo la emisión de su voto en elecciones generales.*

*6.- Tomar parte activa en reuniones, manifestaciones y otros actos de carácter político electoral o partidista, aunque sean permitidos a los demás ciudadanos.*

*7.- Interesarse indebidamente y de cualquier modo, en asuntos pendientes ante los tribunales, o externar su parecer sobre ellos. (…)*

*Los servidores que incurran en los hechos señalados en este artículo serán corregidos disciplinariamente, según la gravedad de la acción, con una de las sanciones establecidas en el artículo 195 de la presente Ley.*

*Las prohibiciones a las que se refieren los incisos 1) y 3) no son aplicables a los servidores que no se desempeñen a tiempo completo.*

*(Así reformado por el artículo 1° de la Ley N° 7728 de 15 de diciembre de 1997)”.*

En lo que interesa, si bien se establece una prohibición general de dirigir felicitaciones o censuras en los términos de la norma indicada, lo relevante para el tema que se analiza es la existencia de la excepción a la regla general, lo que permite tanto a integrantes de la judicatura como del Ministerio Público ejercer la libertad de expresión, derecho de reunión pacífica y algunas formas de derechos políticos. Ello se evidencia con la posibilidad de defensa individual y gremial de asuntos de interés general, tal ha sido el caso de manifestaciones, marchas y huelgas que se han realizado a efectos de la defensa de valores estratégicos de la Administración de Justicia como la Independencia Judicial. También se ha dado en el ámbito gremial respecto a condiciones laborales, remuneración y derechos jubilatorios.

En cuanto a la normativa exclusivamente aplicable a fiscales, se establece en la Ley Orgánica del Ministerio Público[[8]](#footnote-8):

*“Artículo 5.- Publicidad. El Ministerio Público no podrá dar información que atente contra el secreto de las investigaciones o que, innecesariamente, pueda lesionar los derechos de la personalidad. Sin embargo, sus funcionarios podrán, extrajudicialmente, dar opiniones de carácter general y doctrinario acerca de los asuntos en que intervengan.*

*Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 7442 que fue modificada en forma íntegra por el artículo 11 de la Ley Nº 7728, de 15 de diciembre de 1997”.*

Por su parte, el Estatuto de la Justicia y Derechos de las Personas Usuarias del Sistema Judicial***[[9]](#footnote-9)***, establece:

***“****ARTÍCULO 21.- INDEPENDENCIA JUDICIAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN Las libertades de expresión e información no resultan incompatibles con la independencia de los jueces, salvo cuando se ejerciten en forma abusiva o arbitraria, con la clara finalidad de influir indebidamente en el dictado de las resoluciones jurisdiccionales.*

*ARTÍCULO 61.- SECRETO PROFESIONAL a) Los jueces tienen obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con las causas en trámite y con los hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de esta, salvo las autorizaciones que ya contiene el Código de Ética Judicial. b) Tampoco pueden los jueces evacuar consulta ni dar asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o posible****.”***

En relación a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación, el derecho de reunión pacífica y los derechos políticos de los jueces y fiscales se han venido fortaleciendo, al ser la jurisprudencia de dicho tribunal internacional, de aplicación inmediata en el sistema jurídico costarricense. (*Caso López Lone y Otros vs. Honduras*, Sentencia de 5 de octubre de 2015[[10]](#footnote-10)).

En cuanto a la libertad de asociación garantizada constitucionalmente, así como por instrumentos internacionales sobre derechos humanos, en el Poder Judicial costarricense se brinda el espacio necesario para materialización de este derecho (reconocimiento, acreditación de interlocutores, espacio físico y permisos en horas laborales para la actividad gremial); existen 24 organizaciones gremiales de personas trabajadoras en el Poder Judicial.

Estas restricciones se fundamentan en la necesidad de garantizar la independencia del poder judicial respecto de las estructuras de los partidos políticos. Al prohibir la participación de los servidores judiciales en actividades de beligerancia política se busca impedir que el ascenso dentro de la carrera judicial sea “impulsado” o “perjudicado” por la pertenencia a una tendencia política en particular.

**5) Sírvase facilitar detalles sobre la naturaleza de las restricciones específicamente aplicables al ejercicio de las libertades fundamentales por parte de jueces y fiscales. En particular:**

El artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código de Ética, la Ley Orgánica del Ministerio público, son muy claros respecto a las restricciones de los servidores judiciales, las cuales son de naturaleza política, administrativa, laboral, independencia, en términos generales, del ejercicio que lleven a cabo, los (as) jueces (zas) y fiscales (as) en el cumplimiento de las funciones propias y se imponen, según se ha dicho, para procurar evitar conflictos de interés derivables, por ejemplo, de la vinculación político partidaria o bien, la defensa de la regularidad de la gestión de las causas bajo conocimiento del funcionario (a), en el caso del secreto que debe guardar la persona servidora judicial respecto de los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones.

También los perfiles de los cargos de Magistrados y Magistradas, establecen algunas características que deben poseer las personas que deseen entrar en la judicatura, para asegurar la legitimación del sistema democrático costarricense y en resguardo del mismo, por ello, se plantea una reforma al actual sistema de elección de Magistrados y Magistradas tanto propietarios como suplentes, con la finalidad de garantizar la existencia de transparencia, independencia, imparcialidad y credibilidad de nuestro sistema judicial.[[11]](#footnote-11)

El Poder Judicial, por su función especial en la administración de justicia, debe estar conformado por personas servidoras íntegras y eficientes. Al considerar este requerimiento, se observa que los funcionarios y las funcionarias afrontan una serie de amenazas a su independencia judicial y probidad, las cuales, aun cuando no se llegaren a concretar, pueden perjudicar la imagen y la confianza de la población en este Poder Público[[12]](#footnote-12).

**- ¿Son estas restricciones dependientes de la posición y los asuntos sobre los cuales un juez / fiscal particular tiene jurisdicción?**

Estas restricciones son inherentes del asunto o posición que se desempeñe por parte de los jueces o fiscales que laboran para el Poder Judicial. El Código de Ética Judicial, por ejemplo, en su artículo 7 señala:

“*Artículo 7°—El deber de reserva del juez.*

*1) El Juez y la Jueza tienen un deber de reserva respecto de los asuntos sub judice cuando la ley así lo establezca o en ausencia de norma, cuando estime que los derechos o intereses legítimos de alguno de los intervinientes en el proceso puedan verse afectados, o cuando evidentemente no exista un interés en la información.*

*Si bien la libertad de expresión se ejerce en parte a través de los medios de comunicación colectiva, se debe facilitar su actuación en los tribunales cuando esté claro que con ello no se afectarán los derechos de las partes, la deposición de testigos o la misma independencia del Juez, entre otros aspectos importantes. La decisión que el Juez tome sobre el particular podrá ser escrita, cuando él estime que con ello se facilite la comprensión de los motivos que ha tenido”*.

No obstante, se ha indicado que hay deberes genéricos e inherentes al ejercicio de la función pública y atinentes a cada persona servidora.

Debe tomarse en consideración las particularidades de los diferentes regímenes de servicio público existentes en el Poder Judicial, en tanto que hay desde servidores de función auxiliar de la justicia (agentes del Organismo de Investigación Judicial, Fiscales (as), Defensores (as), médicos (as) forenses, etc.) servidores (as) que ejercen la judicatura y los que están en la función administrativa. En razón del cargo podrá o no haber determinados deberes funcionariales.

**- ¿Se debe tener en cuenta el lugar o la capacidad en la que se dan estas opiniones (por ejemplo, si estaban o no ejerciendo o en el caso que podría entenderse que ejercen sus funciones oficiales)?**

Siempre que sean servidores (as) judiciales, deberán de regirse por las prohibiciones señaladas en los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, manteniendo su comportamiento acorde con lo indicado en la Ley citada, dentro y fuera de la institución, incluyendo su vida privada, ya que su investidura se mantiene en todo momento, como ejemplo se cita el artículo 28 de la misma Ley:

*“Artículo 28.- Podrá ser destituido de su cargo, siguiendo el procedimiento establecido y con la previa oportunidad de defensa, el servidor:*

*1.- Al que se imponga pena de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos.*

*2.- Que, por incorrecciones o fallas en el ejercicio de su cargo o en su vida privada, que pueden afectar el buen servicio o la imagen del Poder Judicial, se haya hecho acreedor a esa sanción.*

*3.- Que hubiere llegado a perder alguna de las condiciones esenciales para el ejercicio de su cargo, o incurra en alguna de las prohibidas para ello.*

*4.- Que resultare incompetente o inadecuado para el desempeño de su cargo.*

*5.- Que, habitualmente ingiera bebidas alcohólicas de forma excesiva; consuma drogas no autorizadas o tuviere trastornos graves de conducta, de forma tal que puedan afectar el servicio.”*

Debe tomarse en consideración que los servidores (as) judiciales están bajo un régimen de sujeción especial en donde es legítimo la restricción de determinadas libertades en razón de la función que ejercen y en el entendido de que se den bajo los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad.

Asimismo, lo anterior no debe descontextualizarse del régimen general de responsabilidad de la Ley General de la Administración Pública, y en particular del servidor público, quien responde por todas sus conductas realizadas con dolo o culpa grave.

**-¿Debe tenerse en cuenta el propósito de tales opiniones o manifestaciones?**

Independientemente del propósito que se tenga por parte del funcionario (a), al emitir alguna opinión o manifestación por cualquiera medio existente, ya sea, tecnológico o no, debe resguardar su investidura, ya que esta se mantiene en todo momento y puede ser responsable de las mismas.

No obstante, lo consultado, quedará a valoración del órgano director del procedimiento administrativo y no se estima conveniente pronunciarse a priori sobre un criterio propio de las instancias competentes.

**-¿En qué medida, si lo es, es relevante el contexto, como una crisis democrática, un colapso del orden constitucional o una reforma del sistema judicial, al evaluar la aplicabilidad de estas restricciones?**

Las restricciones analizadas en las respuestas anteriores son independientes, en términos generales, del ejercicio que lleven a cabo, los jueces (zas) y fiscales (as) en el cumplimiento de las funciones propias y se imponen, según se ha dicho, para procurar evitar conflictos de interés derivables, por ejemplo, de la vinculación político partidaria o bien la defensa de la regularidad de la gestión de las causas bajo conocimiento del funcionario (a), por ejemplo en el caso del secreto que debe guardar el servidor judicial respecto de los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones.

En este orden de ideas, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio público señala lo siguiente: “*El Ministerio Público no podrá dar información que atente contra el secreto de las investigaciones o que, innecesariamente, pueda lesionar los derechos de la personalidad. Sin embargo, sus funcionarios podrán, extrajudicialmente, dar opiniones de carácter general y doctrinario acerca de los asuntos en que intervengan*”.

El inciso 7 del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder judicial prohíbe *“Interesarse indebidamente y de cualquier modo, en asuntos pendientes ante los tribunales, o externar su parecer sobre ellos*”.

Este secreto es independiente de la existencia de una crisis democrática, un colapso del orden constitucional o una reforma del sistema judicial ya que tienen que ver con el derecho a la imagen de personas sometidas a procesos judiciales.

Como se ha visto también, existen casos en que la defensa del derecho fundamental de reunión, asociación y la defensa de derechos laborales realizado por un funcionario judicial, puede entrar en conflicto con la restricción establecida normativamente.

**6) Sírvase proporcionar información sobre el alcance o la interpretación que se ha dado a estas restricciones por parte de los tribunales nacionales, los consejos judiciales nacionales, los consejos de fiscales o las autoridades independientes equivalentes con responsabilidades generales en los procedimientos disciplinarios contra jueces y, cuando corresponda, los fiscales. Favor proporcionar ejemplos adicionales sobre estos instantes.**

A modo de ejemplo sobre la interpretación que los tribunales nacionales han efectuado, en casos concretos de procedimientos disciplinarios incoados por funcionarios (as) judiciales y en los que se ha considerado que existe compromiso a derechos fundamentales, puede reiterarse que mediante la resolución de la Sala Constitucional 2017-17765, se acogió el recurso de amparo promovido por la ex jefa de la Defensa Pública, y se interpretó que su participación en la huelga convocada para protestar contra las reformas promovidas legislativamente contra el régimen de pensiones del Poder Judicial, no importaban una desatención a las prohibiciones normativas de participación o beligerancia política, sino el ejercicio de libertades fundamentales por lo que se ordenó dejar sin efecto el traslado de cargos dispuesto en expediente 17-001187-031-IJ por el Tribunal de la Inspección Judicial, disponiéndose el archivo de la causa.

**7) Sírvase proporcionar información sobre las iniciativas emprendidas por las asociaciones profesionales de jueces y, si corresponde, de fiscales, para aumentar su conocimiento de los riesgos asociados con el ejercicio de sus derechos en línea, en particular en las redes sociales.**

No se cuenta con información que se haya desarrollado, gremialmente, ninguna iniciativa con la finalidad de aumentar el conocimiento de los riesgos asociados con el ejercicio de los derechos de jueces (zas) y fiscales.

1. <http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=78308&nValor3=98643&nValor5=2> [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=80809&nValor3=102691&strTipM=TC> [↑](#footnote-ref-2)
3. Inciso 10 del artículo 1 de la Ley Orgánica del Colegio de abogados y abogadas de Costa Rica [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://www.abogados.or.cr/uploads/CMS/Articulo/2.0Codigo_de_Deberes_Juridicos.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://eticayvalores.poder-judicial.go.cr/images/Documentos/manualvalores.pdf> [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://eticayvalores.poder-judicial.go.cr/images/ConsejoNotables/Recomendaciones/01-2015.pdf> [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=33635> [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27760&nValor3=0&strTipM=TC> [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://contraloria.poder-judicial.go.cr/archivos/normativa/estatuto_de_la_justicia_y_derechos_de_las_persona.pdf> [↑](#footnote-ref-9)
10. <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_302_esp.pdf> [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://unmejorpj.poder-judicial.go.cr/index.php/comisiones/seleccion-de-magistrados> [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://unmejorpj.poder-judicial.go.cr/index.php/comisiones/protocolos-de-conductas> [↑](#footnote-ref-12)